



Universidades Lusíada

Atencio Bonilla, Digna

La política pública como asignatura pendiente para la prevención de los conflictos sociales

<http://hdl.handle.net/11067/6956>

<https://doi.org/10.34628/41ym-pm95>

Metadados

Data de Publicação	2024
Palavras Chave	Direitos da criança - América Latina, Crianças em risco - América Latina, Jovens em risco - América Latina, Política social - América Latina
Tipo	article
Revisão de Pares	Não
Coleções	[ULL-FD] LD, s. 2, suplemento (2024)

Esta página foi gerada automaticamente em 2024-11-24T02:28:16Z com informação proveniente do Repositório

LA POLÍTICA PÚBLICA COMO ASIGNATURA PENDIENTE PARA LA PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES

Digna Atencio Bonilla ²⁵

Gracias a la maravilla de la tecnología que en la distancia nos acerca, hoy vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la prevención del delito a partir de dos puntos centrales:

- 1.La violencia estructural contra niños, niñas y jóvenes
- 2.Respuestas político-criminales que pueden incidir en la ralentización del fenómeno delictivo.

Comienzo por decir que la violencia estructural, consecuencia de la corrupción, es sin lugar a duda una de las causas de la criminalidad en general en Latinoamérica que absorbe a nuestros niños, niñas y jóvenes.

Uno de los primeros errores que normalmente se cometen por parte de quienes trabajan en este campo, es que se piensa toda acción del Estado enfocada a los niños, niñas y jóvenes como una forma de prevenir la delincuencia cuando, desde una perspectiva integral, debería abordarse esta temática de una manera distinta, una en la que las acciones que promuevan el acceso a educación de calidad, a saneamiento, a esparcimiento sano sean vistas no como formas de prevenir la criminalidad, sino como expresiones de los diversos derechos que tienen nuestros niños y niñas.

En este contexto, se ha dejado de poner en marcha el modelo de protección desarrollado por la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la totalidad de los países de nuestra región. La

²⁵ Profesora de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal e Investigadora del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua. A intervenção foi proferida *online* em espanhol (<https://doi.org/10.34628/41ym-pm95>)

Convención establece todo un entramado de derechos individuales, económicos, sociales y culturales, entre los cuales se pueden mencionar, por ejemplo, el derecho a educación, a salud, a protección contra la explotación laboral.

Lo que se desprende de la lógica de la Convención es que el instrumento internacional plantea primeramente un sistema de derechos y libertades que no tienen que ver ni con infracciones a las normas penales, ni con garantías procesales de ningún tipo, puesto que se refieren a un sistema de protección. Eso queda claro precisamente al hacer un repaso del texto del instrumento internacional en mención, ya que lo que se privilegia al inicio del instrumento es el desarrollo de todo aquello que tiene que ver con libertades como la de expresión o de culto, con el derecho a la salud, a la educación o a no ser sometidos a explotación laboral para, casi al final del catálogo de derechos reconocidos, abarcar, ya con el artículo 40 - el penúltimo de la parte que podría ser denominada como sustantiva, pues el resto del instrumento es de índole procesal - lo relativo a la forma en que debe ser la intervención respecto de las personas menores de edad infractoras.

Ello obliga a partir, necesariamente de una perspectiva según la cual se debe pensar a las personas menores de edad como sujetos de derechos, lo que debería obligar al Estado a poner en marcha políticas para potenciarles.

Según lo que se desprende del numeral 5c de las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), los Estados deben contar con una política progresista de prevención que debería incluir una intervención "...que se guíe por la justicia y la equidad, y cuya finalidad primordial sea velar por el interés general de los jóvenes..."

La realidad, sin embargo, es - en la mayoría de los casos - otra, puesto que muchos niños, niñas y jóvenes carecen, en Latinoamérica, de acceso a la mayoría de los derechos mencionados.

La Observación General n.º 10 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas destaca que el objetivo principal de la Convención es que la persona menor de edad tenga acceso a un nivel de vida digno y en pleno desarrollo de su personalidad.

Pone énfasis en la responsabilidad de los padres respecto de los niños; este punto es de suma importancia y es un primer aspecto que debe ser abordado si se busca ahondar un poco en el tema de la prevención del delito en general, y es que ya la investigación social se ha referido a uno de los grandes problemas contemporáneos, es decir, el de la fragilización de la familia como una de las causas, entre muchos otros problemas, de la conducta violenta.

Este aspecto debe ser analizado integralmente en el contexto de las políticas de Estado por desarrollar. Ello es así porque la investigación ha señalado la influencia negativa que tienen la precariedad, la pobreza, los bajos ingresos y, en general, la incertidumbre resultada de los procesos de pauperización de los últimos tiempos, en el desarrollo normal de los individuos y en el aumento de la criminalidad.

La familia se ve, en este tipo de contextos, francamente limitada en sus posibilidades de brindar un ambiente en el que las personas jóvenes puedan desenvolverse adecuadamente en función de ese desarrollo pleno y armonioso de su personalidad que proponen la Convención y, luego, el Comité.

Algunas de las condiciones que hacen más vulnerables a las familias son el desempleo y la inserción laboral temprana y precaria, los ingresos bajos e inestables y la fragmentación de los espacios sociales. Este último aspecto, el de la fragmentación de los espacios sociales, tiene mucho que ver con el tema de la prevención de la violencia.

Se ha dado en las últimas décadas un acelerado proceso de urbanización, especialmente en América Latina, que es actualmente la región más urbanizada del mundo en desarrollo.

El hecho de que en Latinoamérica una gran parte de la población viva en grandes ciudades plantea inmensos desafíos.

Ello es así porque las ciudades en América Latina crecen la mayoría de las veces con muy poca planificación y con escasa visión para enfrentar el surgimiento de ámbitos espaciales excluyentes, y es que con el fenómeno del crecimiento de la inequidad han surgido “islas” en las que se ubican espacialmente aquellos que resultan ser los ganadores en el sistema económico tal cual se le conoce hoy,

y grandes cinturones de exclusión social, ghettos, en los que viven quienes resultan ser los excluidos del modelo económico actual.

El problema es que, en gran medida, esa fragmentación de los espacios sociales es una variable que influye mucho para que las personas de los lugares excluidos se vean sumidas en una situación de vulnerabilidad que puede tener una influencia de peso en la generación de conductas violentas como el homicidio. Las rupturas que se dan en este tema producen segregación y marginalidad, zonas donde hay acceso limitado a servicios e infraestructura de calidad, y esta situación de vulnerabilidad produce, entre muchos otros problemas, el surgimiento de tribus urbanas que operan en enclaves que quedan expuestos a ser captados por prácticas que favorecen la desvalorización del otro y la apropiación de territorios por medio de prácticas violentas: “el acceso segmentado por nivel de ingreso a la educación, la salud, los ámbitos culturales y los lugares de esparcimiento limita la posibilidad de generar comunidades más integradas.” La prevención debe verse desde una perspectiva que busque la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso, es una respuesta útil para reducir la incidencia de los delitos.

La realidad plantea grandes retos porque la subregión sigue siendo la más desigual del mundo y el fenómeno persiste.

Respecto de las respuestas político criminales que pueden incidir en la ralentización del fenómeno delictivo, quiero referirme en primer lugar a que el uso de las sanciones alternativas como verdaderas alternativas al encarcelamiento, no sólo depende de su regulación normativa adecuada, que aborde las justificaciones que las inspiran, sino que también dependen de la cultura jurídica en la cual se asientan y el que sean percibidas por los sentenciadores y la comunidad general como sanciones “creíbles”, dotadas de un contenido punitivo adecuado, que les permitan disputar de manera legítima el lugar a la cárcel en marco de las consecuencias jurídicas.

Es allí donde resulta de importancia otras medidas de reacción para lograr la sensibilización en la comunidad respecto de la necesidad de aplicar medidas alternas a la pena de prisión, de lo contrario, estaríamos ante una ilusión social de lucha contra la criminalidad, generando ficticiamente seguridad ciudadana, aislándose

de los factores que hacen a esa criminalidad, factores que también deben ser atendidos por otros sub sistemas de control social, cuando estamos frente a personas que proceden de familias desestructuradas, debido a la pobreza en la que se han desenvuelto, déficits educativos, déficits afectivos o déficits de carácter laboral con la inexistente formación laboral o la falta de integración a un mercado de trabajo; todos estos factores señalan la necesidad de que hay que trabajar sobre ellos para lograr la pretensión constitucional de la “sociedad justa y armoniosa”, y esta tarea no corresponde únicamente al Derecho penal, sino a la implementación de políticas públicas económicas, sociales, educativas, laborales, etc., postulados esenciales de la voluntad jurídica y política del constituyente.

¿Cuáles son las consecuencias de las leyes penales populares? La única consecuencia dramática de la implementación de leyes que no tienen una estructura racional juiciosa y equilibrada, y que solo atienden el sentimiento de las demandas populares punitivistas, será la de crear al famoso “enemigo” de la sociedad al que se alude en la noción del denominado “Derecho penal del enemigo”, a ese ser humano considerado como “ente peligroso o dañino” compatible únicamente desde la teoría política con un modelo de Estado absoluto y total. A continuación, quiero referirme brevemente a respuestas político-criminales que de alguna manera pueden incidir en la ralentización del fenómeno delictivo.

1. Políticas Sociales:

Mecanismos de control social informal como son la educación, la religión y la salud, los servicios asistenciales, las mejoras de vivienda, la configuración y calidad de las ciudades, así como las subvenciones para paliar los riesgos de la sociedad industrializada (paro, enfermedades, miseria, accidentes laborales)

2. Políticas de medios de comunicación:

Comprometerse con el rigor, la seriedad y la ética, no suministrando una imagen distorsionada de la delincuencia.

La información en materia de criminalidad debe ser veraz y contrastada con todas las fuentes necesarias. Los medios de comunicación social deben cumplir con los deberes profesionales establecidos para el ejercicio del periodismo.

3.El Derecho Administrativo Sancionador:

Habilita a los funcionarios públicos a imponer sanciones, especialmente multas administrativas. Un sistema sancionatorio que, si bien puede ser aún más opresivo que el penal, por no contar con las garantías sustanciales y procesales con que éste cuenta, debe coexistir con el Derecho penal: el principio de *ultima ratio* es irrenunciable.

4.Medios de solución de los conflictos extrapenales: la justicia restaurativa:

Cuando nos encontramos ante casos de escasa gravedad y con frecuencia producidos entre personas de un mismo entorno familiar o social (robos entre conocidos, injurias y calumnias entre vecinos, discusiones familiares, etc.) Casos en que la sanción penal sólo puede tener un efecto criminalizador (delincuentes primarios, menores, etc.)

5.Propuestas penales:

Apostar por un proceso de creación de la ley penal coherente con los principios y límites inherentes a un Estado Democrático de Derecho. Una Administración de justicia que cuente con medios suficientes y un poder judicial realmente independiente del poder político. Un cuerpo policial con un poder limitado y reglado, evitando ámbitos de discrecionalidad. Ámbito penitenciario: un sistema progresivo de tratamiento que posibilite el paulatino acceso a la libertad de los condenados a penas de prisión, un programa detallado y exhaustivo de alternativas a la prisión.

(Tradução em português)

A POLÍTICA PÚBLICA COMO QUESTÃO PENDENTE NA PREVENÇÃO DE CONFLITOS SOCIAIS

Graças à tecnologia que nos aproxima, vamos partilhar algumas reflexões sobre a prevenção do crime com base em dois pontos centrais:

1. Violência estrutural contra crianças e jovens.
2. Respostas político-criminais que podem ter impacto no

abrandamento do fenómeno do crime.

Começo por dizer que a violência estrutural, uma consequência da corrupção, é sem dúvida uma das causas da criminalidade em geral que na América Latina absorve as nossas crianças e jovens.

Um dos primeiros erros que é normalmente cometido por quem trabalha neste campo é que toda a ação do Estado centrada nas crianças e jovens é pensada como forma de prevenir o crime, quando, de uma perspetiva integral, a questão deve ser abordada de forma diferente, na qual as ações que promovem o acesso a uma educação de qualidade, saneamento e recreação saudável são vistas, não como formas de prevenir o crime, mas como expressões dos vários direitos que as crianças têm.

Neste contexto, o modelo de proteção desenvolvido pela Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada por todos os países da nossa região, já não está a ser implementado. A Convenção estabelece toda uma rede de direitos individuais, económicos, sociais e culturais, incluindo, por exemplo, o direito à educação, à saúde e à proteção contra a exploração laboral.

O que emerge da lógica da Convenção é que o instrumento internacional estabelece principalmente um sistema de direitos e liberdades que nada têm a ver com violações do direito penal ou com garantias processuais de qualquer tipo, uma vez que se referem a um sistema de proteção.

Isto torna-se claro, precisamente ao rever o texto do instrumento internacional em questão, uma vez que o que é privilegiado no início do instrumento é o desenvolvimento de tudo o que tem a ver com liberdades, como a liberdade de expressão ou de culto, como o direito à saúde, à educação ou a não ser sujeito a exploração laboral, quase no final do catálogo de direitos reconhecidos, o artigo 40.º - o penúltimo artigo do que se poderia chamar a parte substantiva, já que o resto do instrumento é de natureza processual - cobre a forma como a intervenção deve ser levada a cabo no que diz respeito aos delinquentes juvenis.

Isto requer, necessariamente, que se parta de uma perspetiva segundo a qual os menores devem ser considerados como sujeitos de direitos, o que deve obrigar o Estado a implementar políticas

para os capacitar.

De acordo com o parágrafo 5c das Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil (Diretrizes de Riade), os Estados devem ter uma política de prevenção progressiva que deve incluir uma intervenção “... *que seja orientada pela justiça e equidade, e cujo objetivo principal seja assegurar o interesse geral dos jovens...*”.

A realidade, porém, é - na maioria dos casos - diferente, já que muitas crianças e jovens na América Latina não têm acesso à maioria dos direitos mencionados. O Comentário Geral nº 10 do Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas, sublinha que o principal objetivo da Convenção é que a criança tenha acesso a um nível de vida decente em pleno desenvolvimento da sua personalidade. Sublinha a responsabilidade dos pais para com os seus filhos. Este ponto é da maior importância e é um primeiro aspeto que deve ser abordado se quisermos aprofundar um pouco mais a questão da prevenção do crime em geral, uma vez que a investigação social já se referiu a um dos maiores problemas contemporâneos, nomeadamente o da fragilização da família como uma das causas, entre muitos outros problemas, do comportamento violento.

Este aspeto deve ser analisado de forma abrangente no contexto das políticas estatais a serem desenvolvidas. Isto porque a investigação tem apontado para a influência negativa que a precariedade, a pobreza, o baixo rendimento e, em geral, a incerteza resultante dos processos de pauperização dos últimos tempos têm sobre o desenvolvimento normal dos indivíduos e sobre o aumento da criminalidade.

Neste tipo de contexto, a família é francamente limitada nas suas possibilidades de proporcionar um ambiente em que os jovens se possam desenvolver adequadamente em termos de desenvolvimento pleno e harmonioso das suas personalidades, como proposto pela Convenção e, mais tarde, pelo Comitê. Algumas das condições que tornam as famílias mais vulneráveis são o desemprego e a inserção laboral precoce e precária, os rendimentos baixos e instáveis e a fragmentação dos espaços sociais. Este último aspeto, a fragmentação dos espaços sociais, tem muito a ver com a questão da prevenção da violência. Tem havido um processo acelerado de urbanização nas

últimas décadas, especialmente na América Latina, que é hoje a região mais urbanizada do mundo em desenvolvimento.

O facto de na América Latina grande parte da população viver em grandes cidades coloca imensos desafios.

Isto porque as cidades latino-americanas crescem a maior parte do tempo com muito pouco planeamento e pouca visão para abordar a emergência de esferas espaciais de exclusão. Com o fenómeno da crescente desigualdade, surgiram “ilhas” nas quais aqueles que por acaso são vencedores no sistema económico como é conhecido atualmente estão espacialmente localizados. Em grandes faixas de exclusão social e guetos vivem aqueles que por acaso são excluídos do atual modelo económico.

O problema é que, em grande medida, esta fragmentação dos espaços sociais é uma variável altamente influente para que as pessoas em lugares excluídos sejam mergulhadas numa situação de vulnerabilidade que pode ter uma forte influência na geração de comportamentos violentos como o homicídio.

As ruturas que ocorrem neste campo produzem segregação e marginalidade em áreas onde há acesso limitado a serviços e infraestruturas de qualidade, e esta situação de vulnerabilidade produz, entre muitos outros problemas, o aparecimento de tribos urbanas que operam em enclaves expostos a serem capturados por práticas que favorecem a desvalorização de outros e a apropriação de territórios através de práticas violentas: “o acesso segmentado por nível de rendimento à educação, saúde, áreas culturais e locais de recreio limita a possibilidade de gerar comunidades mais integradas”.

A prevenção deve ser vista de uma perspectiva que procura reduzir a desigualdade na distribuição de rendimentos; é uma resposta útil para reduzir a incidência do crime.

A realidade coloca grandes desafios porque a sub-região continua a ser a mais desigual do mundo e o fenómeno persiste.

No que diz respeito às respostas político-criminais que podem ter impacto no abrandamento do fenómeno criminal, gostaria de referir em primeiro lugar o facto de que a utilização de sanções alternativas como verdadeiras alternativas à prisão depende não só

da sua adequada regulamentação normativa, que aborda as justificações que as inspiram, Dependem também da cultura jurídica em que estão inseridos e de serem vistos pelos sentenciadores e pela comunidade em geral como sanções “credíveis”, dotadas de um conteúdo punitivo adequado, permitindo-lhes contestar legitimamente o lugar de prisão no quadro das consequências legais.

É aqui que outras medidas reativas são importantes para sensibilizar a comunidade para a necessidade de aplicar medidas alternativas à prisão, caso contrário seríamos confrontados com uma ilusão social de luta contra o crime, gerando ficticiamente a segurança pública, isolados dos fatores que causam esta criminalidade, fatores que também devem ser abordados por outros subsistemas de controlo social, quando estamos a lidar com pessoas provenientes de famílias disfuncionais, devido à pobreza em que se desenvolveram, défices educativos, défices afetivos ou de natureza profissional com formação profissional inexistente ou falta de integração no mercado de trabalho; Todos estes fatores apontam para a necessidade de trabalhar sobre eles a fim de alcançar a reivindicação constitucional de uma “sociedade justa e harmoniosa”, e esta tarefa não corresponde apenas ao direito penal, mas à implementação de políticas públicas económicas, sociais, educacionais, laborais, etc., postulados essenciais da vontade jurídica e política do constituinte.

Quais são as consequências das leis penais populares? A única consequência dramática da implementação de leis que não têm uma estrutura racional criteriosa e equilibrada, e que apenas satisfazem o sentimento das exigências punitivas populares, será criar o famoso “inimigo” da sociedade referido na noção do chamado “direito penal do inimigo”, que o ser humano considerado como uma “entidade perigosa ou prejudicial” compatível apenas a partir da teoria política com um modelo de Estado absoluto e total.

A seguir, gostaria de referir brevemente as respostas de política criminal que podem, de alguma forma, ter um impacto no abrandamento do fenómeno criminal.

1. Políticas sociais:

Mecanismos informais de controlo social tais como educação, religião e saúde, serviços sociais, melhorias na habitação, a configu-

ração e qualidade das cidades, bem como subsídios para aliviar os riscos da sociedade industrializada (desemprego, doença, miséria, acidentes industriais).

2. Políticas dos meios de comunicação social:

Comprometer-se com o rigor, a seriedade e a ética, não fornecendo uma imagem distorcida do crime. A informação sobre o crime deve ser verdadeira e cruzada com todas as fontes necessárias. Os meios de comunicação social devem cumprir os deveres profissionais estabelecidos para a prática do jornalismo.

3. Lei de Sanções Administrativas:

Permite que os funcionários públicos imponham sanções, especialmente multas administrativas. Um sistema de sanções que, embora possa ser ainda mais opressivo do que o direito penal, porque não tem as garantias substanciais e processuais que este último tem, deve coexistir com o direito penal: o princípio do último recurso não pode ser derogado.

4. Meios de resolução de conflitos extrapenais: justiça restaurativa:

Quando estamos a lidar com casos de baixa seriedade e que ocorrem frequentemente entre pessoas do mesmo ambiente familiar ou social (roubo entre conhecidos, insultos e calúnias entre vizinhos, discussões familiares, etc.). Casos em que a sanção penal só pode ter um efeito “criminalizador” (delinquentes primários, menores, etc.).

5. Propostas penais:

Compromisso com um processo de legislação penal coerente com os princípios e limites inerentes a um Estado democrático regido pelo Estado de direito. Uma administração da justiça com recursos suficientes e um sistema judicial verdadeiramente independente do poder político. Uma força policial com poder limitado e regulamentado, evitando áreas de discricção. Na esfera penitenciária: um sistema progressivo de tratamento que possibilita o acesso gradual à liberdade das pessoas condenadas à prisão, um programa detalhado e exaustivo de alternativas à prisão.

(English translation)

**PUBLIC POLICY AS A PENDING ISSUE
IN SOCIAL CONFLICT PREVENTION**

Thanks to the wonder of technology that brings us together, today we will share with you some thoughts on crime prevention based on two central points:

Structural violence against children and young people

Criminal policy responses that can have an impact on slowing down the crime phenomenon.

I begin by saying that structural violence, a consequence of corruption, is undoubtedly one of the causes of crime in general in Latin America, which absorbs our children and young people.

One of the first mistakes that is usually made by those who work in this field is that all State action focused on children and young people is thought of as a way to prevent crime when, from an integral perspective, this issue should be approached in a different way, in which actions promoting access to quality education, sanitation and healthy recreation are seen not as ways to prevent crime but as expressions of the various rights that our children have.

In this context, the protection model developed by the Convention on the Rights of the Child, ratified by all the countries in our region, is no longer being implemented. The Convention establishes a whole network of individual, economic, social and cultural rights, including, for example, the right to education, health and protection against labour exploitation.

What emerges from the logic of the Convention is that the international instrument primarily establishes a system of rights and freedoms that have nothing to do with violations of criminal law or with procedural guarantees of any kind, as they refer to a system of protection.

This becomes clear precisely when reviewing the text of the international instrument in question, since what is favoured at the beginning of the instrument is the development of everything that has to do with freedoms such as freedom of expression or worship, with the

right to health, education or not to be subjected to labour exploitation, almost at the end of the catalogue of recognised rights, article 40 - the penultimate article of what could be called the substantive part, since the rest of the instrument is procedural in nature - covers the way in which intervention should be carried out with regard to juvenile offenders.

This necessarily requires starting from a perspective according to which minors should be considered as subjects of rights, which should oblige the State to implement policies to empower them.

According to paragraph 5c of the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines), States should have a progressive prevention policy that should include an intervention "...that is guided by justice and equity, and whose main objective is to ensure the general interest of young people...".

The reality, however, is - in most cases - different, as many children and young people in Latin America do not have access to most of the rights mentioned. General Comment No. 10 of the United Nations Committee on the Rights of the Child stresses that the main objective of the Convention is that the child should have access to a decent standard of living in full development of his or her personality.

It stresses the responsibility of parents towards their children; this point is of the utmost importance and is a first aspect that must be addressed if we want to go a little deeper into the issue of crime prevention in general, since social research has already referred to one of the major contemporary problems, namely the weakening of the family as one of the causes, among many other problems, of violent behaviour.

This aspect should be analysed comprehensively in the context of the state policies to be developed. This is because research has pointed to the negative influence that precariousness, poverty, low income and, in general, the uncertainty resulting from the impoverishment processes of recent times have on the normal development of individuals and on the increase in criminality.

In this type of context, the family is frankly limited in its possibilities of providing an environment in which young people can develop properly in terms of the full and harmonious development of

their personalities, as proposed by the Convention and later by the Committee.

Some of the conditions that make families more vulnerable are unemployment and early and precarious employment, low and unstable incomes and the fragmentation of social spaces. This last aspect, the fragmentation of social spaces, has a lot to do with the issue of violence prevention.

There has been an accelerated process of urbanisation in recent decades, especially in Latin America, which is now the most urbanised region in the developing world.

The fact that in Latin America a large part of the population lives in large cities poses immense challenges.

This is because Latin American cities grow most of the time with very little planning and little vision to address the emergence of spatial spheres of exclusion. With the phenomenon of growing inequality, 'islands' have emerged in which those who happen to be winners in the economic system as it is known today are spatially located. In large swathes of social exclusion and ghettos, live those who happen to be excluded from the current economic model.

The problem is that, to a large extent, this fragmentation of social spaces is a highly influential variable for people in excluded places to be plunged into a situation of vulnerability that can have a strong influence on the generation of violent behaviour such as homicide.

The ruptures that occur in this matter produce segregation and marginality in areas where there is limited access to quality services and infrastructures, and this situation of vulnerability produces, among many other problems, the emergence of urban tribes that operate in enclaves exposed to be captured by practices that favour the devaluation of others and the appropriation of territories through violent practices: "segmented access by income level to education, health, cultural areas and recreational places limits the possibility of generating more integrated communities".

Prevention should be seen from a perspective that seeks to reduce inequality in income distribution; it is a useful response to reduce the incidence of crime.

The reality poses great challenges because the sub-region remains

the most unequal in the world and the phenomenon persists.

Regarding the political-criminal responses that can have an impact on slowing down the criminal phenomenon, I would like to mention first of all the fact that the use of alternative sanctions as true alternatives to imprisonment depends not only on their adequate normative regulation, which addresses the justifications that inspire them. They also depend on the legal culture in which they are embedded and, on their being, seen by sentencers and the community in general as “credible” sanctions, endowed with an adequate punitive content, allowing them to legitimately challenge the place of imprisonment within the framework of the legal consequences.

This is where other reactive measures are important to make the community aware of the need to apply alternative measures to prison, otherwise we would be faced with a social illusion of fighting crime, fictitiously generating public safety, isolated from the factors that cause this criminality, factors that must also be addressed by other social control subsystems, when we are dealing with people coming from dysfunctional families, due to the poverty in which they developed, educational deficits, affective deficits or of a professional nature with non-existent vocational training or lack of integration in the labour market. All these factors point to the need to work on them to achieve the constitutional claim of a “just and harmonious society”, and this task does not correspond only to criminal law, but to the implementation of public economic, social, educational, labour policies, etc., essential postulates of the legal and political will of the constituent.

What are the consequences of popular penal laws? The only dramatic consequence of implementing laws that lack a judicious and balanced rational structure, and that only satisfy the sentiment of popular punitive demands, will be to create the famous “enemy” of society referred to in the notion of the so-called “criminal law of the enemy”, that human being considered as a “dangerous or harmful entity” compatible only from political theory with a model of absolute and total state.

In the following, I would like to briefly refer to criminal policy responses that can somehow have an impact on slowing down the

criminal phenomenon.

1. Social Policies:

Informal mechanisms of social control such as education, religion and health, social services, improvements in housing, the configuration and quality of cities, as well as subsidies to alleviate the risks of industrialised society (unemployment, disease, destitution, industrial accidents).

2. Media Policies:

Commit to accuracy, seriousness and ethics, not providing a distorted image of crime.

Information on crime should be truthful and cross-referenced with all necessary sources. The media should comply with the professional duties established for the practice of journalism.

3. Administrative Sanctions Act:

Allows public officials to impose sanctions, especially administrative fines. A system of sanctions which, although it may be even more oppressive than criminal law because it does not have the substantial and procedural guarantees that the latter has, must coexist with criminal law: the principle of last resort cannot be derogated from.

4. Extra-penal means of conflict resolution: Restorative Justice:

When we are dealing with cases of low seriousness and which often occur between people in the same family or social environment (theft between acquaintances, insults and slander between neighbours, family arguments, etc.). Cases in which the criminal sanction can only have a “criminalising” effect (first-time offenders, minors, etc.).

5. Penal Proposals:

Commitment to a process of criminal legislation consistent with the principles and limits inherent in a democratic state governed by the rule of law. Sufficiently resourced administration of justice and a judicial system which is truly independent of political power. A police force with limited and regulated power, avoiding areas of discretion. In the penitentiary sphere: a progressive system of treatment that enables gradual access to freedom for people sentenced to prison, a detailed and exhaustive programme of alternatives to prison.